

Conflicto-economía y postconflicto: evidencia para el caribe colombiano

Conflict-Economy and Post-Conflict:
Evidence for The Colombian Caribbean

JOSÉ LUIS RAMOS-RUIZ
Universidad del Norte, Barranquilla
jramos@uninorte.edu.co

JOSÉ LUIS POLO-OTERO
Universidad del Norte, Barranquilla
lpoloj@uninorte.edu.co

GUSTAVO RODRIGUEZ-ALBOR
Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla
Gustavo.Rodriguez51@uac.edu.co

NESTOR JUAN SANABRIA-LANDEZÁBAL
Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla
nestor.sanabria@uautonoma.edu.co

JOSÉ LUIS MORENO-CUELLO
Universidad del Norte, Barranquilla
jmoreno@uninorte.edu.co

Abstract

For more than fifty years, Colombia experienced an internal conflict armed with guerrillas and paramilitaries. This, according to some studies, contributed to reduce the opportunities for economic growth. Given the consolidation of a peace agreement with the guerrilla group, the FARC, expectations and fears have been raised about the country's course in a post-conflict environment, especially in the regions where the armed actions of the conflict made them more vulnerable. This article analyzes the impact of the conflict in the Colombian Caribbean, relating the criminal acts in function of the regional Gross Domestic Product [GDP]. It also reflects on the problems of institutionality derived from the conflict. It is found that for each attack carried out by the guerrillas, the regional GDP decreases by 0.3%; and if the attacks are caused by the paramilitaries, this is reduced by 0.1%. The article presents a review of the strategies and policies implemented in some countries with post-conflict agreements. The results and reflections point to the need to think post-conflict beyond the cessation of the use of weapons with a search for positive peace in order to assume the new risk implemented in the current ways in which the new civilizing spaces are built.

Keywords: Conflict, Postconflict, Gross Domestic Product.

Resumen

Durante más de cincuenta años Colombia vivió un conflicto interno armado con guerrilla y paramilitares. Este, de acuerdo con algunos estudios, contribuyó a mermar las oportunidades de crecimiento económico. Ante la consolidación de un acuerdo de paz con el grupo guerrillero, las FARC, se han generado expectativas y temores acerca del rumbo del país en un ambiente de postconflicto, especialmente en las regiones a donde el accionar armado del conflicto las hacía más vulnerables. Este artículo analiza el impacto del conflicto en el Caribe colombiano, relacionando los actos delictivos en función del Producto Interno Bruto [PIB] regional. También se reflexiona acerca de los problemas de institucionalidad derivados del conflicto. Se encuentra que por cada ataque realizado por la guerrilla, el PIB regional disminuye en un 0,3%; y si los ataques son ocasionados por los paramilitares este se reduce en un 0,1%. El artículo presenta una revisión de las estrategias y políticas implementadas en algunos países con acuerdos de postconflicto. Los resultados y reflexiones apuntan a la necesidad de pensar el posconflicto más allá de la cesación del uso de las armas con una búsqueda de paz positiva a fin de asumir el nuevo riesgo implementado en las actuales formas en que se construye los nuevos espacios civilizatorios.

Palabras claves: Conflicto, Postconflicto, Producto Interno Bruto.

1. A manera de introducción

El conflicto interno armado es uno de los factores que han incidido en el desarrollo económico y social de Colombia. Esto se refleja en el reconocimiento de costos tangibles e intangibles que impactan el desarrollo, la institucionalidad y, en general, los modos de vida en las diferentes regiones, en lo que Darlauf (2004, capítulo 50) describe como efecto vecindario, refiriéndose a hechos que impactan más allá del entorno inmediato de ocurrencia.

Generalmente, la literatura especializada reconoce la existencia de una relación inversa entre crecimiento económico y conflicto armado, en la medida en que este último constituye un factor obstaculizador para la promoción de la inversión privada extranjera, además de los daños que causa a la infraestructura de servicios públicos de los territorios (sistema de transporte, redes de generación eléctrica, escuelas y puestos de salud, entre otros). Adicionalmente, Sánchez-Torres & Díaz (2005) señalan que el conflicto armado destruye capital humano, genera incertidumbre para consolidar la inversión en los territorios y desvía el gasto del gobierno hacia actividades menos productivas, incrementándolo en defensa y seguridad en detrimento de la inversión de los sectores sociales.

Para Schelling (1964: 15-17) el conflicto puede concebirse desde dos ópticas. En la primera lo considera un estado patológico y trata de investigar sus causas y establecer un tratamiento. La segunda, acepta el conflicto como un hecho consumado, analizando los comportamientos a que da lugar. En este sentido, analiza en su complejidad a quienes participan de forma racional, consciente y elaborada, asumiendo el conflicto como un tipo de competencia en la que todos los participantes tratan de ganar. Este último elemento es distintivo en Colombia en los últimos 50 años, donde son reconocibles grupos al margen de la ley con intereses definidos.

Williamson (1985: 272), por su parte, afirma que el oportunismo y la racionalidad limitada de los individuos puede conducir a la generación de conflicto en la medida que algunos pretenden —a partir de la cooptación del Estado, captura de rentas, expropiación y corrupción— maximizar sus decisiones afectando a otros dadas las limitadas opciones con que se cuenta para mejorar las condiciones de vida. Parafraseando a Coase (1937: 388), el conflicto conduce a la existencia de costos de transacción en los mercados, inestabilidad institucional y bajo nivel de desarrollo.

Otras vertientes como la expresada por Elías (1989) al analizar grandes lapsos, permiten apreciar la evolución social sobre la base de las transformaciones culturales. En términos de método de análisis esto implica:

Un elevado grado de exposición a los peligros de un proceso que incrementa el aspecto emocional de las reacciones humanas. Una actuación poco realista inducida por emociones intensas reduce la oportunidad de adquirir dominio sobre el proceso crítico que implicará un modelo procesual... que entraña una ruptura con la tradición [...] que presenta [...] al sujeto de conocimiento [...] como una cadena de generaciones entrelazadas (Elías, 1994: 182-183).

Beck (2017) señala, no obstante, que la perspectiva evolutiva que subyace en autores como Elías, no es suficiente para entender los cambios hoy, en tanto que, no hay características culturales que se transmitan en los espacios de la sociedad, como fue hasta la emergencia de la alta velocidad de circulación de la información, sino que se asiste a una gran ruptura asimilable a la metamorfosis en la cual no aparece claramente delimitado que es el bien ni que es el mal. En este sentido, conflicto y, el posconflicto, pueden ser aparentemente entendidos dentro de una misma la lógica. Se puede interrogar sólo de manera hipotética: si hay paz, la entrada en la competencia de las zonas con fuerte influencia de los actores ilegales, va a tener la capacidad de competir con las maneras y modos de la industria agrícola. Ha existido siempre la solución cooperativa pero, en general, esta conduce a la misma pobreza que define el actor ilegítimo como origen de su accionar armado. Así, aunque la paz sea un bien, también trae incognitas difíciles de superar. Es el mismo problema establecido con la postverdad y su construcción: se deforma la realidad pero, ¿eso al menos no es una verdad así sea falsa? ¿porqué verdad y realidad debe ser igual si la verdad es una colección de mitos contruidos sobre heurísticas de disponibilidad como lo presentan los hoy Premios Nobel Tversky & Kanehman)?

Es en este sentido que las hipótesis de este artículo se orientan a mostrar como el acumulado social tiene como una de sus aristas las negociaciones de paz, pero sólo como una y, solo es representativa de una pequeña fracción de la historia social de Colombia. Y, desde una perspectiva de largo plazo se ingresa al posconflicto no como resultado de parar el accionar armado, sino porque este, frente a los cambios derivados, principalmente de las TIC's y los escenarios globalizados, no solo lo hace obsoleto, sino abiertamente negativo a la posibilidad de alcanzar el ejercicio del poder del Estado. Se reconoce entonces con ello, el interés estratégico de los grupos participantes en las negociaciones.

Es en este marco que es explicable el impacto del accionar armado en el PIB. Adicionalmente permite evidenciar la complejidad presente en las relaciones entre el conflicto y la economía regional. Para ello, en primer lugar, se elabora una aproximación cuantitativa sobre el costo del conflicto armado en el Caribe colombiano. Igualmente, se examinan los hallazgos de investigaciones realizadas recientemente sobre la relación conflicto armado y crecimiento económico en Colombia. Entre los resultados más importantes se destaca que la tendencia del conflicto en el Caribe colombiano guarda similitud con la presentada a nivel nacional. Un resultado derivado de la utilización del modelo econométrico, señala que por cada ataque de la guerrilla (FARC - ELN), el PIB regional disminuye en un 0.3% y, si los ataques son realizados por los paramilitares (AUC o BACRIM), el PIB regional se reduce en un 0.1%. Estos resultados son producto de la conducta basada en la competencia entre grupos que rivalizan sobre recursos limitados (vgr. tierras) que conciben como suyos, al margen de la institucionalidad y las leyes sobre la propiedad.

A partir de esos hallazgos se revisan algunos aspectos de la perspectiva neoinstitucional. Al escudriñar en esta perspectiva, las cifras del delito hicieron factible entender cómo el accionar ilegal de los grupos armados no es significativo en su impacto directo, sino en la consolidación de una cultura de la intolerancia y del manejo inadecuado del conflictos por fuera de los espacios legalmente definidos para su eventual solución. Posteriormente se presentan las conclusiones más importantes derivadas de la relación conflicto armado y economía de los territorios y desde el contraste con otros trabajos se revisan los planteamientos sobre el posconflicto propuestos desde el subsistema político.

2. Algunos referentes en torno al conflicto

En Colombia, los estudios realizados para cuantificar relación conflicto y economía han tenido dificultades debido a problemas de conformación de bases de datos periódicas y de largo aliento, subregistros en fuentes, agregación de variables sin un fuerte marco teórico que permita una clara interpretación y, en algunos casos, problemas de recolección y clasificación. Al respecto, agregan Ibáñez & Jaramillo (2006: 94), que *pese a las consecuencias que puede haber significado el prolongado conflicto colombiano para la economía, pocos estudios han explorado este tema. Las investigaciones sobre el conflicto se han centrado sobre sus causas y no sobre sus consecuencias.*

En la relación economía y conflicto existen investigaciones recientes que aportan resultados significativos desde el ámbito de la ciencia económica. En la cronología de los últimos cuatro quinquenios se destacan, a nivel internacional, los estudios de Raknerud & Hegre (1997), Collier & Hoeffler (1998), Hegre (2000), Ross (2004), Elbadawi & Hegre (2008), Martin, Mayer & Thoenig (2008), Collier & Duponchel (2010) y Maystadt, De Luca, Sekeris & Olimwengu (2014).

Raknerud & Hegre (1997) proponen analizar la relación entre paz y democracia entre países haciendo uso de un modelo *Cox* tiempo-calendario. Esto permite tener en cuenta aspectos que modifican la duración de la guerra a través de la intervención de otros países

que han vivido iguales eventos en tiempos pasados. Es decir, estos autores sustentan que la contigüidad y la convergencia política y económica, podrían aumentar la posibilidad de mayores conflictos entre países.

Por su parte, ante el interrogante *¿Son las guerras civiles causadas por aspectos económicos?* Los economistas Collier & Hoeffler (1998), con una muestra de noventa y ocho países responden positivamente al interrogante. En efecto, tres de cada diez países estudiados presentaron guerras civiles durante el periodo de análisis (1960-1992) producto de la distribución del ingreso. Concluyen que las guerras civiles se dan principalmente en los países de ingreso per cápita bajo, con el agravante de que éste aumenta la probabilidad de prolongación de la guerra. Igualmente sucede con la posesión de recursos naturales en los territorios. Si un país posee recursos naturales la probabilidad de aparición de guerras civiles es de 56%, mientras que en aquellos que no poseenla probabilidad solo asciende a un 12%. Adicionalmente, el tamaño poblacional y la diversificación etno-lingüística se constituyen, a juicio de estos investigadores, en factores determinantes en la generación y duración de este tipo de guerras.

Al estudiar la relación entre comercio internacional y la paz, Hegre (2000), teniendo en cuenta un modelo gravitacional de la teoría del comercio internacional (Krugman & Obstfeld, 2006, 13-20) y, considerando un período de más de cuatro décadas, encuentra que el aumento del comercio internacional favorece la paz entre los países. Adicionalmente, el nivel de desarrollo también afecta positivamente la consecución de la misma. Así pues, países con un nivel de desarrollo bajo, tienden a no mantener la paz liberal. En esta misma dirección, Bayer & Rupert (2004), a través de un *pooled* de 120 países entre 1950-1992, analizan los efectos que tienen las guerras civiles en el comercio internacional. El autor, utilizando regresiones de Mínimos Cuadrados Ordinarios y organizando los países en diadas, observa que la existencia de guerra civil, disminuye en un 40% el comercio entre los dos países. También encuentra que la negociación entre las partes en conflicto puede generar un aumento en el comercio internacional.

Como ocurre en el caso de la distribución de la riqueza, los aportes de Ross (2004) muestran que la dotación de recursos naturales en un territorio es potencialmente generador de conflictos armados internos. Este autor encuentra que los recursos naturales, en conjunto, no establecen una relación directa y robusta con las guerras civiles. Sin embargo, la existencia de petróleo en un territorio determinado tiene relación con la aparición de guerras internas en razón a la existencia de concepciones nacionalistas en el manejo de los recursos. Concluye con dos aspectos importantes. El primero indica que si el país es rico en diamantes y productor de narcóticos, el conflicto tiende alargarse. El segundo aspecto señala que la producción de bienes agrícolas no es generadora de guerras civiles. El acicate del primer aspecto se puede ubicar en los altos rendimientos de los mercados ilegales, narcotráfico y en lo escaso de bienes como los diamantes.

Por su parte, Elbadawi & Hegre (2008) estudian la relación existente entre conflictos internos y comercio internacional desde una óptica distinta a la de Bayer & Rupert (2004). Esos autores analizan si las aperturas de las economías a los mercados internacionales y los *shocks* en los términos de intercambio aumentan el riesgo de que existan

conflictos internos en una nación. Utilizando la metodología propuesta por Raknerud & Hegre (1997), es decir haciendo uso del modelo de *Cox* tiempo-calendario, encuentran que no existe evidencia de que la apertura económica y las variaciones en los términos de intercambio incrementen el riesgo de guerras civiles internas

Así, al analizar la relación existente entre globalización y guerras, Martin, Mayer & Thoenig (2008) muestran, a partir de un modelo teórico, que la probabilidad de conflictos globales disminuye; sin embargo, la probabilidad de un conflicto bilateral en un marco de globalización aumenta. Este resultado se debe principalmente a la baja dependencia entre los dos países que se vean involucrados en dicho conflicto. Para comprobar empíricamente el planteamiento de su modelo, los autores hacen uso del modelo gravitacional, reseñado atrás, y encuentran que los resultados se dan tal cual como ellos lo proponen.

En ese mismo orden de ideas, Collier & Duponchel (2010) estudian las consecuencias de la guerra civil en Sierra Leona durante el periodo 1991-2002. El estudio fue realizado desde una perspectiva microeconómica, mediante los efectos que tuvo la guerra en las empresas. Este autor asume hipotéticamente que la guerra genera reversión en la técnica y reducen la demanda, a causa de la carencia o poca disponibilidad de insumos productivos y de la disminución en los ingresos de los residentes. Sin embargo, este efecto no difiere entre zonas donde el conflicto fue más intenso y las que no lo fue o no se presentó conflicto. Mediante estimaciones por minimocuadráticas probit y logit, confirman las hipótesis de la existencia de reversión técnica en las empresas y disminución de la demanda. En consecuencia y para revertir las consecuencias de las guerras civiles, esos autores sugieren que en épocas de postconflicto el Gobierno debe fortalecer el capital humano del país debido a que este se ve fuertemente afectado durante el conflicto.

Con un estudio para 48 países productores de petróleo, Ramsay (2011), en el periodo 1968-2002, revisa si es plausible la externalidad negativa que, desde una orilla ideológica se le imputa a los recursos naturales y el papel que juegan las instituciones políticas en el cumplimiento de esta hipótesis. Mediante el uso de variables instrumentales y su impacto en los cambios en el precio de petróleo, encuentra que, cambios en la riqueza generado por cambios en el precio del petróleo influyen en los cambios de las instituciones y políticas para favorecer la explotación de los recursos naturales. Igualmente encuentra que los factores dinámicos del mercado influyen en los ingresos petroleros pero esta variación no es clara para los formuladores de políticas. Una solución a esta controversia se da desde la perspectiva de la denominada enfermedad holandesa de la economía¹

En la misma línea de investigación, Maystadt, De luca, Sekeris & Olimwengu (2014) a través de mínimos cuadrados en dos etapas analizan si, en la República del Congo durante el periodo de 1997-2007, se observan externalidades negativas, lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales. Es decir, si las concesiones mineras generan conflictos en la República. Para ello se tienen en cuenta aspectos territoriales y datos georreferenciados. A nivel nacional encuentran que no hay un efecto sobre los conflictos causados por las concesiones mineras. Sin embargo a nivel distrito petrolero, un aumento

¹ Para una buena referencia teórica véase: Corden (1984) y Bresser-Pereira (2008), entre muchos de los autores que tocan este tema.

de 10% en las concesiones mineras aumentan en un 29% la probabilidad de que se de una guerra local. Para mostrar formalmente estos resultados, los autores plantean un modelo de equilibrio micro-fundamentado.

También se han elaborado un conjunto de teorías económicas que permiten estudiar comportamientos y *intentional actions* de los agentes; como delitos, crímenes, guerras y violencias, entre otras (Becker, 1974: 1-54, Aumann, 2005). Se desarrollan conceptos que posibilitan comprender la conducta y los efectos que tienen sobre el crecimiento económico las acciones conflictivas. Al respecto, Valencia (2006: 144) señala que sólo a principios del siglo XX, con Pareto (1946, cap. II), es cuando se logra introducir el conflicto en el estudio de la economía. Para Valencia, Pareto ve el conflicto *como una pugna por la distribución de la producción cuyo efecto es desviar recursos de actividades productivas, hacia actividades improductivas*.

Otros aportes significativos a este debate, fueron realizados en la década de 1930 por Alchian y Demsetz (1981: 319). Estos explicaron el desarrollo de los derechos de propiedad exclusivos sin modelar las instituciones políticas y sociales, lo que a juicio de otros autores representó una limitación del concepto (Krier, 2009: 143). A este debate, se agrega la interpretación del concepto de conflicto desde el enfoque materialista bajo la premisa de que *los cambios históricos en los derechos de propiedad eran resultado de la combinación del avance tecnológico y del deseo del hombre de subordinar la naturaleza* (Ramos, 2012: 93). Con esto, los derechos de propiedad no resultan de la libre interacción de individuos maximizadores de su utilidad. Esto es, si las estructuras institucionales existentes no permiten proteger o dar expresión adecuada a los nuevos requerimientos, se genera una presión espontánea de los individuos con el objeto de modificar las reglas de juego, para dar cabida a las nuevas condiciones donde cada uno de los agentes busca obtener los mayores beneficios de la transacción.

En la línea de investigación relacionada con conflicto – postconflicto los estudios se han direccionado a mostrar las políticas y estrategias diseñadas para los procesos de paz y el mantenimiento del statu quo, como se puede colegir de los esquemas expuestos. Esto implica que, se parte del supuesto que los derechos de propiedad y, en general los espacios macro y las instituciones, así como las demás variables están en equilibrio, por alguna razón se ha salido de este estadio y se busca como volver a él. Sobre esta base el problema de las negociaciones no implican cambiar el statu quo, como se enunció atrás, sino solucionar hechos cercanos en el tiempo y síntomas, denominando a esto el posconflicto².

Se quiere decir, en la perspectiva teórica de este artículo, que los métodos desarrollados para comprender la realidad de la sociedad industrial y su búsqueda de uniformidad fueron muy importantes en la construcción de la historia de la humanidad a partir del siglo XIX y hasta el siglo XX. Estos métodos harán la diferencia con las expresiones artesanas propias de la sociedad agraria y a la cual amplios segmentos de población desarrollaron sus comprensiones de la vida. En lo mas desarrollado de las sociedades se transformó a los micro y pequeños productores en asalariados, generándose permanente conflicto y lo que traería aparejado: su correspondiente posconflicto como solución. Así, lo agrícola y

² Este esquema se asemeja al modelo de comprensión de la economía IS-LM desarrollado por Hicks (1985)

lo industrial moderno, en lo correspondiente al siglo XX, se encontrarán en la búsqueda de la disminución de riesgos e incertidumbres como la estrategia de construcción de la sociedad (Aguilar, 2004).

En la actualidad los esfuerzos apuntan a ubicarse en los espacios de un nuevo riesgo, definido en alcances mayores que los problemas financieros, por ejemplo los riesgos medioambientales. Con estos riesgos, se puede comprender la búsqueda de la captura de rentas ilegales, al margen de un balance institucional y legitimante equilibrado, como pueden entenderse las modernas versiones del narcotráfico y la corrupción. Se debe tener en cuenta, entonces, que el nuevo riesgo no tiene implicación sustantivas sobre la solución de lo pasado. Y, este se asume como dato necesario para darle continuidad en la construcción social en T0 de lo que se alcance a imaginar, vía creatividad, en T1...n., como se predica en las escuelas neoinstitucionales, por ejemplo de la economía evolutiva (Nelson & Winter, 1982, entre muchos autores de esta importante vertiente de la comprensión del cambio técnico y social)

En esta perspectiva, no se desprecia ni los alcances de la era agrícola-industrial ni de la agraria, pero se asume que el posconflicto está generado en la abierta contradicción entre unas concepciones y modelos de sociedad como los descritos, agrarios versus agrícola e industrial, eficaces pero no eficientes para la apuesta de futuro y lo que parece ser la llamada cuarta revolución (Schwab, 2016) y su cambio en las maneras y modos de ver, aprender y construir.

De esta manera el problema de la paz abandona el prejuicio de callar las armas y adquiere características complejas entre diferentes formas de entender la sociedad. Algunos de los autores que más literatura han provisto en los últimos tiempos ha sido Galtung (1964, 1996), y Galtung & Fischer (2013), quienes incluyen el concepto en un esquema más amplio. Este involucra el fin de un conflicto pensado alrededor de la justicia social, equidad y bienestar económico. En lo que ha denominado Paz positiva, Galtung construyó una teoría acerca del conflicto, afirmando que este es obvio en toda sociedad. En general, sus estudios enfatizan en dos tipologías de paz: la paz positiva y la paz negativa. Galtung concibe la paz negativa como *la ausencia de violencia, la ausencia de guerra*, mientras que define la paz positiva como *la integración de la sociedad humana* (Galtung, 1964: 2).

Desde la perspectiva teórica enunciada, los aportes de Galtung adquieren mayor trascendencia cuando deja interrogantes por resolver en cuanto a la integración social... ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? La búsqueda de las respuestas brinda mayor relevancia al análisis de los impactos de los conflictos en la construcción de riqueza y, si esa construcción de riqueza y la solución de los conflictos sigue la lógica, comúnmente aceptada de la evolución o asistimos a una ruptura con cardinalidades diferentes, como se presentó de manera hipotética, que todos los conflictos tienen raíces históricas de muy largo aliento y, la consolidación de la fase actual de la globalización va a remitir el posconflicto a los linderos establecidos del entorno global a través de sus institucionalidades, desde ONU hasta CPI, las maneras y modos de aceptar los límites de los conflictos y los nuevos constructos de la ciencia y la manera de apostarle a un desarrollo disruptivo.

Metodológicamente se procede así:

El análisis econométrico tiene como objeto identificar el impacto generado por los ataques sobre el crecimiento económico, comparando entre los ataques perpetuados por los grupos involucrados (guerrilleros y paramilitares). En consideración con lo anterior, las ecuaciones que explican los resultados entre conflicto armado y economía en su forma funcional se pueden describir como:

$$\ln(PIB)_t = f[\ln(ataques)_{\text{generales, guerrilla, paramilitares}}, D_t, \varepsilon]$$

En la cual *PIB* corresponde al Producto Interno Bruto, *D* es una variable dicotómica temporal y ε es error estadístico.

Con miras a estimar el impacto sobre el crecimiento económico se han realizado regresiones en primeras diferencias, donde la variable endógena se obtiene de la diferencia entre los logaritmos del PIB en el periodo «t» y el periodo «t-1», es decir:

$$\ln(PIB)_t - \ln(PIB)_{t-1}$$

Esta diferencia representa el crecimiento económico, cabe resaltar que al estimar el modelo en primeras diferencias, se cancela el efecto de las variables dicotómicas temporales (*Dt*) y el efecto generado por éstas es absorbido por la diferencia en la variable exógena. Al calcular la primera diferencia encontramos también, la variación en los ataques de los grupos alzados en armas, por tal motivo, estamos analizando un modelo en crecimiento. Las nuevas ecuaciones³ son:

$$\Delta \ln(PIB)_t = \beta_1 \Delta \ln(Ataques Generales)_t + \varepsilon_t$$

$$\Delta \ln(PIB)_t = \beta_1 \Delta \ln(Ataques Guerrilla)_t + \varepsilon_t$$

$$\Delta \ln(PIB)_t = \beta_1 \Delta \ln(Ataques Paramilitares)_t + \varepsilon_t$$

Como se mencionó, se realizó una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, en la que los coeficientes de las variables de interés se interpretan como cambios porcentuales respecto a la variable a explicar.

Posteriormente y recurriendo a datos consolidados del conflicto se reflexiona sobre el alcance del mismo y se orienta el trabajo a mostrar la viabilidad de la interpretación teórica enunciada.

3. Conflicto armado en Colombia

En Colombia, la violación de los derechos de propiedad por parte de actores armados —guerrilla, paramilitares o cuerpos militares legítimos o con el respaldo de alguno de

³ Se dejan como supuestos que las variaciones en la balanza de pagos, principalmente en su subcuenta de errores y omisiones a donde se registra la entrada de capitales no registrados en la contabilidad nacional, no afectan ni al accionar armado ni al PIB. Un estudio más detallado debe asumir estas variaciones. Una buena aproximación se encuentra en Steiner (1997).

estos— se ha traducido en la obtención de riquezas con intimidación, propias de los períodos coloniales y esclavistas de la civilización occidental. Igualmente, el proceso de desplazamiento forzado es un claro ejemplo de la contravención a las reglas de juego colectivas del bienestar, generando una ampliación de la brecha social y convirtiéndose en una de las principales causas de la espiral caótica del conflicto y en un factor obstaculizador para el desarrollo económico de las regiones colombianas.

Como se muestra en la literatura sobre el conflicto armado de Colombia, algunos trabajos puntualizan su atención en los actores armados y sus participaciones (fuerzas armadas, guerrillas, y paramilitares), otros analizan las causas y los móviles de las confrontaciones, mientras que otros trabajos hacen hincapié en la incidencia transversal que tiene el conflicto sobre la mayoría de las variables económicas. De estos últimos se resalta que comparten la cuantificación de aspectos comunes como los costos por daños a la infraestructura física, las transferencias ilegales generadas por el secuestro y la extorsión, el gasto militar, la pérdida de productividad, los costos sociales, la inadecuada asignación de recursos y la contracción de la actividad económica, entre otros aspectos.

Uno de los trabajos pioneros sobre los costos económicos del conflicto armado en Colombia fue desarrollado por Rubio (1997: 12). En este, se presentan algunos factores difícilmente medibles económicamente, pero con alta incidencia en materia de políticas públicas. En esta misma dirección, aparece el estudio de Guerrero & Londoño (1999: 78). Estos autores, concluyen que «*Colombia sería un 15% ó 20% más rico de lo que es si no hubiese vivido un conflicto interno armado en los últimos 20 años*». Expresado de otra manera, Colombia perdió entre 1980–1999 la oportunidad de crecer un 0,5% adicional en promedio anual (Álvarez y Rettberg, 2008: 22).

Por su parte, Cárdenas (2001: 16) desarrolló un estudio en el que concluyó que el país perdió en dos décadas (1980–2000) el sendero de crecimiento económico en parte debido a la intensificación del conflicto armado que alejó sin duda alguna la inversión extranjera, particularmente en sectores promisorios como la explotación minera y la industria de capital pesado.

Algunos economistas y sociólogos han presentado una gama de resultados sobre crecimiento económico y conflicto armado para la última década del siglo pasado (1990–2000), que bien lo resume Álvarez y Rettberg (2008: 23), citando a otros autores, así:

los costos del conflicto armado han aumentado sustancialmente a través del tiempo. Así, para el período entre 1990 y 1998, los costos representaron aproximadamente entre 1,5% y 4% del Producto Interno Bruto (PIB) anual (Castro, Wartenberg y Celis, 2000:25); (Trujillo y Badel, 1998: 18) y (Granada y Rojas, 1995: 124). Posteriormente, entre 1999 y 2003, los costos derivados del conflicto fueron estimados en 7,4% del PIB, es decir, \$16,5 billones (Pinto, Vergara y Lahuerta, 2005: 38). Por su parte, Otero (2007: 82) plantea que en el período 2005 y 2006 «[...] se llega a gastos y costos por el conflicto cercanos a 9,0% del PIB» (Otero, 2007: 369).

De otra parte, en el trabajo realizado por Bourguignon, Núñez & Sánchez (2002) en las siete principales ciudades de Colombia, los autores defienden que, *sólo una parte concreta de la distribución de la renta, y no ésta de forma global, tal como la recogen las medidas de desigualdad comúnmente utilizadas, afecta al índice de criminalidad (robo) de una sociedad*. De su análisis para las siete principales ciudades de Colombia entre 1986–1996, mediante un análisis de datos de panel concluyen que una gran proporción de los actores de la delincuencia común en el país se encuentran en los hogares donde la renta per cápita es inferior al 80% de la media. De forma que, los cambios en la distribución de los hogares por encima de ese umbral, no tendrían efectos sobre el índice de criminalidad; es decir que ningún incremento en la renta de los hogares por encima de este límite no disminuiría el índice de criminalidad. Este resultado es coherente con la constatación de que los individuos al establecer comparaciones no lo hacen con aquellos segmentos de la sociedad cuyos estilos de vida consideran totalmente fuera de su alcance, sino con aquellos otros más próximos que actúan como punto de referencia de su posición social.

En otra dirección de estudio, aparentemente contradictorio con los anteriores autores, Durán (2011: 39), utilizando un modelo de panel de diferencias en diferencias entre 1988–2008, para el conjunto de municipios del país, concluye que *el conflicto armado ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento económico per cápita en los municipios colombianos*. Este autor concluye que los verdaderos costos generados por estos grupos se encuentran a largo plazo, puesto que se destinan cantidades de dinero a inversiones no productivas —Armamento y mayor vinculación de personal a las Fuerzas Militares de Colombia, entre otros—, que podrían destinarse para educación o mejoramiento de la calidad de vida; así como la pérdida del capital humano y físico que obstruye en gran medida el desarrollo de los ambientes propicios para el crecimiento económico, sumado a la imagen negativa que recibe el país a nivel mundial, que lo hace menos llamativo para inversiones e incrementa las calificaciones de riesgo.

Igualmente Alvarez y Rettberg (2008: 22) concluyen que *moverse en un entorno impregnado de violencia representa en sí costos sustanciales y reales que la sociedad se ve obligada a asumir*. Para ello, y basados en el estudio realizado por Trujillo y Badel (1998: 24), los anteriores autores presentan una clasificación de los costos directos e indirectos derivados del conflicto armado. Para ellos, los primeros costos generan pérdidas de capital físico, natural y humano; mientras que los segundos no implican movimiento de gastos en efectivo, pero representan la utilización del tiempo de los afectados que se traduce en costos de oportunidad o uso alternativo perdido de bienes o factores de producción. El cuadro 1 reúne los principales costos directos e indirectos del conflicto armado en Colombia que afectan significativamente el desarrollo económico de los territorios.

A nivel monetario, el conflicto armado representa grandes erogaciones para el Estado colombiano y para aquellas personas que se ven sometidas o amenazadas por algún grupo al margen de la ley. Por ejemplo, se evidencia a partir del trabajo de Alvarez y Rettberg (2008: 31) que, los costos de la destrucción de infraestructura física, principalmente la

utilizada para el transporte de petróleo, se incrementó entre 1999 y 2003 un 59% (Véase, Figura 1).

Cuadro 1. Costos directos e indirectos del conflicto armado en Colombia

COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS
Costos generados por daños a la infraestructura física	Pérdidas de productividad
*Eléctrica (atentados a torres y líneas de conexión eléctrica)	*Alteración en la administración eficiente de los negocios y las empresas en general.
*Petrolera (atentados contra oleoductos)	*Pérdida de capital humano y productividad por inasistencia laboral
*Telecomunicaciones (ataques a redes de comunicación)	*Pérdida de productividad de tierras
*Sector de producción de carbón (atentados a las vías férreas)	*Disminución o desvío de la inversión
*Estructura vial (ataques a puentes, peajes y vías férreas)	*Fuga de capitales
Costos generados por el secuestro y el abigeato	*Disminución en la inversión de tecnología y capital físico
Pago de rescates	*Inadecuada asignación de recursos (representan un costo de oportunidad para la economía)
Gastos del Estado para controlarlo y prevenirlo	*Seguridad privada
Robo de ganado y pago de extorsiones	*Pago por incapacidades e indemnizaciones
Costos generados por el desplazamiento forzado	*Seguros relacionados con la seguridad
Gastos del Estado (asistencia económica a la población desplazada)	*Aumento de los costos de transacción
Costos generados por el uso de minas antipersonas	*Incertidumbre sobre las reglas de juego, intercambios y contratos.
Gastos del Estado (indemnizaciones a población afectada y gastos para destruir las minas antipersonas).	*Impacto sobre la distribución del ingreso y la riqueza (propiedad privada)
Gastos en defensa y seguridad Gastos del Estado	* Impacto sobre la pobreza
Remuneraciones y asignaciones a personal militar, adquisición de nuevos equipos, operaciones y mantenimiento	

Fuente: Tomado de Álvarez y Rettberg (2008, p. 22).

De igual manera, en el periodo comprendido entre 1993-2003, la infraestructura eléctrica del país fue afectada. Los costos asumidos por reparación de torres eléctricas y de telecomunicaciones se incrementaron sustancialmente. Adicionalmente, durante este mismo periodo, el conflicto armado generó menor dinámica en el transporte de carga y pasajeros. Los grupos al margen de la ley dinamitaron once peajes y un puente, cuyos efectos directos derivados de la falta de infraestructura; se vieron reflejados en el abastecimiento de alimentos hacia algunos territorios dependientes del comercio de bienes agrícolas.

Otros costos directos derivados del conflicto armado lo constituyen el secuestro, abigeato y pago de extorsiones. Con respecto al primero, se reveló un comportamiento creciente entre 1996 y 2003, (Véase, Cuadro 2), siendo la tasa de crecimiento de 9.3%.

Así mismo, en otros años se presentaron incrementos significativos de este fenómeno, por ejemplo en 1998 fue de 46.2% y en el 2000 de 37.2% (Pinto y Lahuerta, 2004: 29).

Cuadro 2. Cuantificación de algunos Costos directos e indirectos del conflicto armado en Colombia, 1996 – 2003 (En millones de pesos de 2003)

TIPO DE COSTOS	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	TOTAL
Costos directos									
Gasto del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro y la extorsión	25.019	30.289	27.776	31.272	47.197	36.442	57.552	63.257	318.809
Pago de Rescates	30.634	16.507	35.703	23.338	20.150	12.765	18.574	5.035	162.709
Costos indirectos									
Pérdida de capital humano asociada con el tiempo de cautiverio de secuestrados	3.989	15.197	27.799	20.133	39.796	15.617	12.043	3.308	137.886
Pérdida de capital humano asociada con muerte temprana de secuestrados	1.756	21.152	30.246	19.202	21.753	14.220	10.606	9.867	128.805
GRAN TOTAL	61.401	83.147	121.527	93.947	128.897	79.045	98.777	81.467	748.211

Fuente: Tomado de Álvarez y Rettberg (2008, p. 22).

Como medida para contrarrestar la alta tasa de secuestro, el gasto del Estado colombiano en la lucha contra este problema de seguridad, se incrementó durante 1996–2003 un 14%. Estas acciones generaron una disminución en el pago por rescate de secuestrados un 29% durante el periodo señalado anteriormente. Adicionalmente, el incremento en el gasto de lucha contra el secuestro y la extorsión, también se vió reflejado en la disminución de la tasa de secuestro entre 2000 y 2005 (Vergara & Lahuerta, 2004).

En síntesis, los estudios avalan la existencia de una conexión inversa entre crecimiento económico y conflicto armado y que el delito se soporta en lo político-cultural. Se puede aceptar, teóricamente, que esto es posible en la medida en que este último aspecto se convierte en un factor obstaculizador para la promoción de la inversión privada nacional y extranjera, además de los daños que causa a la infraestructura de servicios públicos de los territorios. Sin embargo los datos estadísticos (Concha & Gómez, 2016) no permiten establecer unos indicadores concluyentes en razón a que la inversión efectivamente si creció, pero no se tiene registro en las zonas a donde el conflicto es agudo.

Relacionado con lo anterior, Durán (2011: 39) señala que el conflicto armado destruye capital humano y capital físico, genera incertidumbre para consolidar la inversión en los territorios y desvía el gasto de gobierno hacia actividades menos productivas, incrementándose el gasto en defensa y seguridad en detrimento de la inversión de los sectores sociales (Díaz & Sánchez, 2008: 83 – Citado por Durán, 2011: 39). También en este caso se pueden abrir interrogantes en tanto que las actividades de inteligencia militar requieren de formación de recursos humanos, así como la infraestructura para la guerra. Se puede admitir, pero desde perspectivas ideológicas, que el gasto en rubros diferentes hubiera podido retornar mas beneficios, pero este tipo de simulaciones para comparar los efectos no son tan claras. Este interrogante puede admitirse cómo valido si se revisa que el tremendo avance de las telecomunicaciones y otros muchos aspectos científicos fueron resultados de la catástrofe humana llamada Segunda Guerra.

Un dato aquí es importante de resaltar. Los altos precios del petróleo de la década pasada indujo lo que en economía se denomina «enfermedad holandesa». El hecho puede ser discutible, pero la caída de los precios implicó para Colombia un agudo desequilibrio en la estructura interna de la balanza de pagos que impacto la economía. También es importante recordar que, concordante con la negociación y la cesación del conflicto se aumentó el área cultivada de cocaína y otros estupefacientes como la heroína. Curiosamente estos productos en el principal mercado, Estados Unidos, han incrementado su precio y su comportamiento se puede pensar como si fuera un bien giffen: a mayor precio, mayor demanda. El resultado de esto es que por la vía ilegal, se contribuye a sostener la economía y sin este recurso la crisis sería mayor como lo atina a presentar López-Caballero (2017). Se puede entonces comprender el nuevo riesgo planteado por Beck (2017) en el que el cambio, hoy, desnuda partes positivas y negativas del mismo.

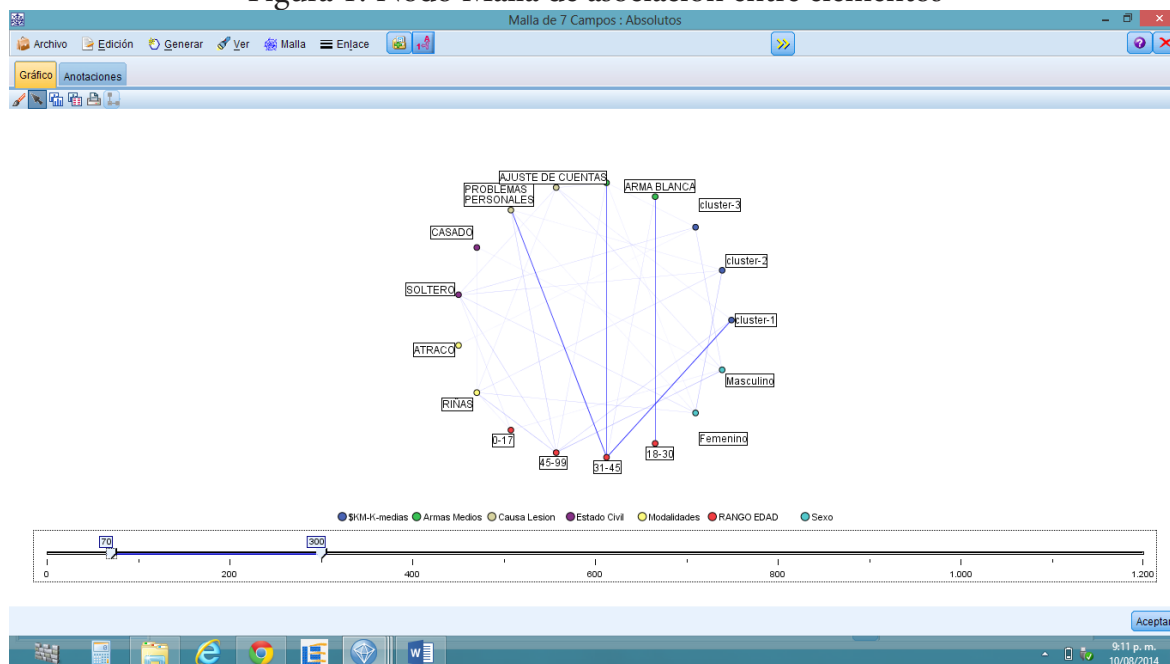
En este escenario, el posconflicto no está mediado por el conflicto en los términos definidos por el accionar militar de corto plazo. En Sanabria, Cárdenas & Contreras (2016) se muestra para la realidad del Distrito Capital Bogotá, incluida su zona rural y los municipios conurbados, cómo el delito con arma de fuego presenta la siguiente estadística: el 54.5% es la venganza la mayor motivación de delito, seguido por la discusión o riña 15%. En cuanto a la ubicación geográfica del delito, el 52.9%, se ejecuta con habitantes del mismo sector de residencia del agresor. Y, para el año 2012, el 83.1% es asociable a formas extremas de resolver los conflictos en los espacios sociales legales.

Así, la complejidad del fenómeno no descarta la hipótesis de las causas materiales eficientes imputadas a la economía. Sin embargo, lo presentado permite sustentar teóricamente también la no dependencia estricta de las condiciones económicas, lo cual permite entender el 0,5% de impacto en el producto regional presentado en el cuadro 4. También controvierte para todo el escenario nacional el que sean las organizaciones armadas las mayores productoras de hechos delictivos con armas de fuego y que, como se presenta en la Figura 1⁴, la venganza y la riña pueden ser interpretadas como propias de una cultura incapaz de solucionar sus conflictos por la vía del diálogo o paz positiva en los términos de Galtung. También es importante señalar la no representatividad de la variable des-

4 Construida con RNA (Redes Neuronales Adaptables en Modeler)

empleados en los delitos de agresión con arma de fuego y que las condiciones materiales de grandes espacios del Distrito Capital son muy parecidos en las variables sociales a lo existente en los municipios del Atlántico. Esto niega la asociación en los imaginarios urbanos con pobreza y delincuencia. La gráfica muestra esa realidad y añade un dato nuevo: la mayor parte de los individuos agresores tienen una edad entre 31 y 45 años de edad.

Figura 1. Nodo Malla de asociación entre elementos



Fuente Policía Nacional. Cálculos: Sanabria, Cárdenas & Contreras (2015)

En resumidas cuentas, a la luz del planteamiento teórico que orienta este escrito, a nivel nacional macroagregado, no es concluyente que, en el corto en el largo plazo, como se presenta atrás, se pueda llegar a posturas incuestionables. Podría argumentarse que la cantidad de muertos en la segunda guerra mundial es el único balance de esta guerra? Y, el tremendo desarrollo tecnológico que va a implicar el esfuerzo de guerra y que llega a nuestros días no se contabiliza? El saldo de ese comportamiento brutal es lo que somos hoy. En el caso colombiano, se puede probar que estadísticamente existe correlación entre el incremento del número de hectáreas cultivadas de coca y la disminución del conflicto como resultado de las negociaciones de paz. Igualmente que la reducción del área de la selva del amazonas, pulmón del mundo, es inversa con la cesación de las acciones armadas por parte de la insurgencia.

4. El conflicto armado en el caribe colombiano

El Caribe colombiano, ubicado al norte del país, posee una extensión de 132.288 km², equivalente al 11,6% del territorio nacional. Se extiende de occidente a oriente desde los límites con el Urabá antioqueño hasta los límites con Venezuela y, hacia el sur, fija

su extensión con la frontera de los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander. Incluye, el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo que la región tiene además una frontera marítima con países de la cuenca del Caribe, tales como Costa Rica, Nicaragua, Jamaica, Haití y República Dominicana.

El Caribe colombiano esta integrado por ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre. Conta con 183 municipios. Según datos estimados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2015 residen en esta región 10.226.146 habitantes, que representan el 21,5% de la población total del país. Aproximadamente, tres cuarta partes de la población se concentra en las áreas urbanas y una cuarta parte en zonas rurales, y su densidad poblacional es de 77 habitantes por km².

La estructura económica de la región Caribe para el año 2013 está distribuida así: (1) el sector primario, conformado por la agricultura y minería, representan el 19.4% del PIB regional; (2) el sector secundario, integrado por la actividad industrial, la construcción y las obras públicas, representan aproximadamente el 22.3% del Pib del Caribe colombiano; y finalmente, (3) el sector terciario, representado por comercio, transporte, banca financiera y servicios del gobierno, entre otros, corresponden al 58.3% de la producción regional.

Particularmente, al estudiar el fenómeno del conflicto armado y su incidencia en el crecimiento económico del Caribe colombiano, se observa que esta región no es ajena a los efectos que causa en los territorios del país. Reyes-Posada (1987) afirma que

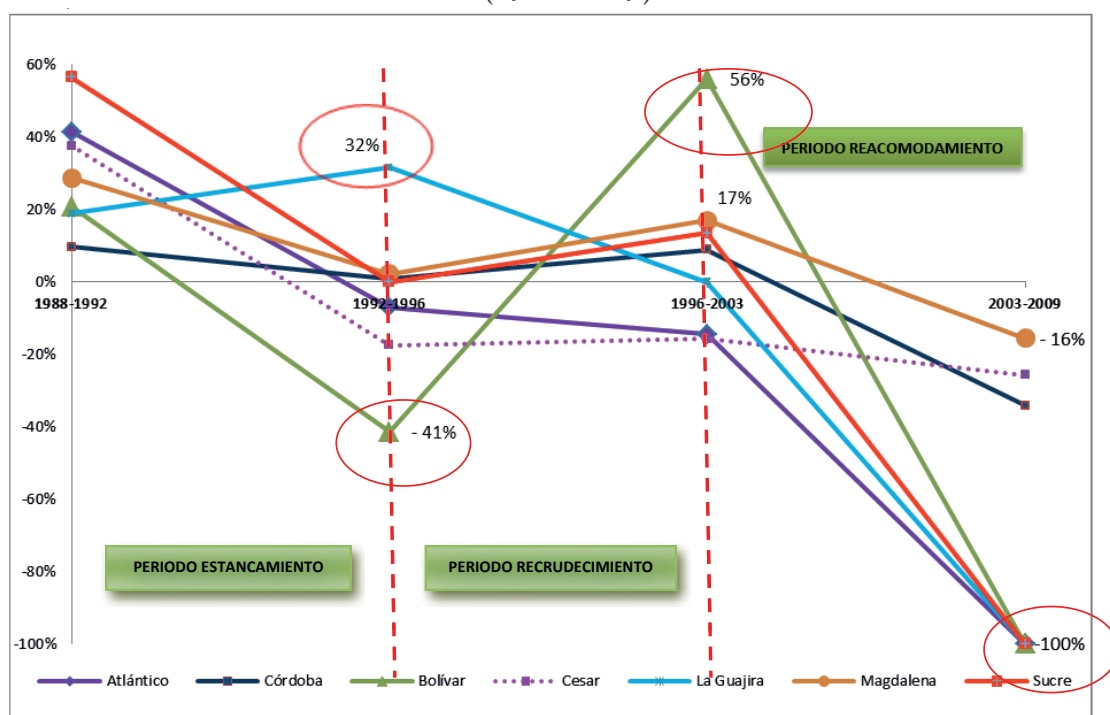
la Costa Atlántica es la región con mayores conflictos por la tierra, De los 155 municipios que la integran, hay 55 con conflictos abiertos por la tenencia de la tierra, 24 con alta presión campesina y 5 de colonización. Los conflictos se presentan en 11 de los 26 municipios de Córdoba, en los 23 municipios de Sucre, en 2 de los 30 de Bolívar, en 6 de los 21 municipios del Magdalena, 10 de los 23 del Cesar y 3 de los 9 de La Guajira.

En este norte y con la información del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), se presentan dos tipos de análisis. El primero, de tipo descriptivo, donde se estudian para el periodo 1988 y 2009 los eventos violentos, las muertes violentas y los combates sucedidos entre la fuerza pública contra la guerrilla y paramilitares y entre estos dos últimos. El segundo análisis, de orden econométrico, se presenta con el objeto de relacionar como los actos del conflicto armado afectan el crecimiento económico del Caribe colombiano [PIB regional].

Con respecto al primer análisis, el CERAC considera que un evento debe cumplir dos condiciones: primero, debe partir de un hecho de violencia y, segundo, debe ser reportado por una o varias fuentes de información. En la perspectiva de Durán (2011), con datos de CERAC, se aprecian cuatro periodos del conflicto entre 1988-2009: Periodo de Ajuste (1988-1991); Periodo de Estancamiento (1992-1995); Periodo de Recrudescimiento (1996-2002); y, Periodo de Reacomodamiento (2003-2009), lo cual hace referencia a la no estabilidad del conflicto.

El periodo que resultó con mayor número de *eventos violentos* fue el de reacomodamiento; particularmente en el Departamento de Bolívar, donde se registraron 275 en el año 2004 y 270 eventos violentos en el año 2007. Pero no solo este Departamento resultó con un aumento significativo en el número de eventos violentos en comparación con los otros tres periodos. Cinco departamentos que conforman el Caribe colombiano, evidenciaron eventos violentos, así: Atlántico con 55 eventos; Córdoba 79; La Guajira 46; Magdalena 73 y Sucre con 117 eventos en promedio durante 2003-2009.

Figura 2. Crecimiento promedio de los combates realizados en el Caribe colombiano (1988-2009)



Fuente: Los autores con base en estadísticas del Cerac, 2012

A pesar de presentar el mayor número de eventos violentos durante los tres primeros periodos del conflicto entre 1988-2009, el departamento del César, fue el único que en el periodo de reacomodamiento no registró un crecimiento en este indicador; de hecho, este disminuyó en 88%, contado desde 1997, año en el cual se registraron 214 eventos violentos, con respecto a los 27 registrados en el 2009.

Otro indicador importante es el número de *muerres violentas* ocurridas a partir de los enfrentamientos de guerrilleros, paramilitares, civiles, soldados y policías. Podemos observar que la época donde hubo más muertes reportadas, fue el periodo de recrudescimiento de los grupos armados, especialmente en los departamentos del Magdalena y Bolívar, donde se generaron en sus puntos máximos, 340 y 312 muertos, respectivamente.

Al igual que los *eventos violentos*, las *muerres violentas* se generaron en el periodo de reacomodamiento, en el cual se presentaron incrementos significativos en todos los departamentos. Siendo Bolívar, el departamento que mayor muertes violentas registró entre

2003 y 2009 (114 en promedio); seguidamente aparece Magdalena (70 en promedio), Córdoba (62 en promedio), César (59 en promedio), Sucre (56 en promedio), La Guajira (52 en promedio) y el Atlántico (25 en promedio).

A partir del año 1996 hasta el 2003 (Recrudescimiento), se incrementó aceleradamente la cantidad de combates de la fuerza pública (Ejército Nacional – Policía Nacional) contra las Farc y Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), como también entre estos grupos armados, particularmente en los departamentos de Bolívar y Magdalena, y en menor medida Córdoba y Sucre.

Cuadro 3. Gastos Público Militar de Colombia, 1990 – 2014. Cifras en millones de dólares constantes de 2011

PAISES	AÑOS									Crecimiento prom. anual 1990 - 2014	% del PIB (2014)
	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014		
Colombia	2,661	4,727	6,077	8,011	11,072	10,307	11,031	12,489	13,061	6.9%	3.4%
Chile	2,266	2,734	3,329	4,335	5,131	5,440	5,347	5,255	5,545	3.8%	2.0%
Mexico	2,643	3,468	4,131	4,081	6,203	6,471	7,106	7,456	8,255	4.9%	0.7%
Peru [*]	54	1,491	1,509	1,632	2,074	2,026	2,198	2,724	2,621	4.0%	1.4%
Argentina	2,519	2,513	2,170	2,028	3,606	4,052	4,578	5,607	6,083	3.7%	1.0%
Brasil	19,490	22,856	25,178	26,505	38,132	36,936	37,647	37,948	37,290	2.7%	1.4%
Venezuela [*]	<i>n.d.</i>	2,662	2,611	3,615	2,552	2,385	4,101	4,400	2,921	0.5%	1.1%
Estados Unidos	527,097	411,631	394,097	579,768	720,220	711,338	670,897	617,687	577,511	0.4%	3.5%

[*] El crecimiento promedio anual de Perú se midió desde el año 2000 y el de Venezuela desde 1995.

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI Military Expenditures Database, 2014

Por otro lado, las estadísticas del CERAC, registran que en algunos departamentos del Caribe colombiano no se dieron combates en el periodo de reacomodamiento, tal es el caso de Atlántico, Bolívar, La Guajira y Sucre. Los otros tres departamentos, a pesar de registrar combates, exhiben una tasa de crecimiento decreciente (César, Magdalena y Córdoba). Si analizamos el desarrollo de los combates en la región durante los cuatros periodos del conflicto armado, es trascendental resaltar que el periodo de recrudescimiento, fue el periodo con las tasas de crecimiento más elevadas: Por ejemplo, Bolívar registró una tasa de crecimiento de 56%, luego de exhibir una tasa negativa de 41% en el periodo de estancamiento (1992-1995). (Ver Figura 2). También cabe resaltar que la tasa de crecimiento registrada en el departamento de La Guajira, que luego de registrar la más alta (32% promedio) en el periodo de estancamiento, finalizó en el 2009 con uno de los registros más bajos en la historia del conflicto armado.

Este crecimiento en el conflicto colombiano y particularmente en la región Caribe, se ha visto reflejado en un mayor gasto público militar ejecutado entre 1990 al 2014. En efecto, Colombia en el periodo señalado tuvo un crecimiento promedio anual de 6.9%;

cifra superior en más de 6 puntos porcentuales al gasto militar ejecutado en Estados Unidos y Venezuela, y superior en más de 4% al de Brasil. Por otro lado, con respecto al PIB, el gasto público militar colombiano llegó a representar el 3.4%; cifra muy similar al de Estados Unidos, con la salvedad de que éste último, es la primera potencia mundial y el país que tiene un mayor presupuesto militar en valores absolutos [US\$577 miles de millones], el cual equivale 1.35 veces el Pib total de Colombia. Con respecto a los otros países de América Latina que invierten un monto representativo en gasto público militar, Colombia gasta 1.4 puntos porcentuales más que Chile; 2.7 más que México; 2 puntos porcentuales más que Perú y 2.4 más que Argentina.

En relación con el segundo análisis, se utilizó la base de datos del CERAC, del periodo 1988 al 2009 y datos del PIB departamental suministrados por el Dane. Al ejecutar las estimaciones consignadas en la metodología se obtuvieron resultados para la relación conflicto armado (por grupos involucrados) y economía regional.

Cuadro 4. Efecto Conflicto Armado sobre Crecimiento Económico Caribe colombiano, 1988 – 2009

Ataques (*)	Crecimiento del Pib
General (Farc/Eln + Auc)	—0,0052
Guerrilla (Farc/Eln)	—0,0032
Paramilitares (Auc)	—0,0015
Periodo: 1988 – 2009 Departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Variable Dependiente: Crecimiento del Pib (medida de desarrollo económico) Método de estimación: Mínimos Cuadrados Ordinarios. Observaciones: 104 Significativo al: 95%	
(*)Ataques = Se considera como una acción unilateral a todo acto contra personas o infraestructura en el que usualmente se recurre al uso de la fuerza y que no tiene necesariamente respuesta armada.	

Fuente: Los autores con base en estadísticas del CERAC, 2012

Los resultados para el PIB regional son los siguientes: por cada ataque general realizado en los departamentos del Caribe colombiano, el crecimiento del PIB regional disminuye en un 0.5% sumando a los tres actores considerados. Si los ataques provienen de la guerrilla (Farc –Eln) el crecimiento del Pib regional decrece 0.3%. Finalmente, si los ataques son ocasionados por los paramilitares (Auc), el crecimiento del Pib regional se reduce en un 0.1% (Véase, Cuadro 4).

Este último resultado en el Caribe colombiano, esta en dirección con los principios que sustentan la aparición de los paramilitares en el país. Es decir, son los que menos afectaciones le generan al aparato productivo de los territorios, dado que su razón política aparente es defender la actividad legal en los departamentos de la región. Así mismo, estos

resultados contradicen los obtenidos por Durán (2011:39), cuando revela en su estudio, que:

los paramilitares fueron quienes mayor impacto negativo han generado», siendo para este autor contraintuitivo, puesto que éstos se constituyen como organizaciones ilegales con una ideología aparentemente pro Estado y, en muchas zonas del país, se profesan como defensores del capital económico y terrateniente.

Según Schelling (1964), se evidencia que los actores del conflicto armado en el Caribe colombiano participan de forma racional, donde el conflicto es una especie de competición en la que cada uno de ellos tratan de ganar espacio a través de la intimidación bélica. Como consecuencia surge el oportunismo de los individuos participantes del conflicto (guerrilla y paramilitares), los cuales terminan maximizando sus beneficios a partir de la captura de rentas y expropiación de la propiedad privada, afectando el ciclo normal de las economías departamentales, destruyendo la institucionalidad necesaria a la expansión del mercado y el crecimiento económico, como lo expresa Williamson (1985, 269-296).

En esta misma dirección, la evidencia empírica concuerda con lo formulado por Boulding (1973, 440-449), quien afirma que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre grupos y tendría lugar cuando dos grupos rivalizan sobre objetivos o recursos limitados que conciben como suyos. En Colombia, según lo expresa Amaya (2001:612) se generaron disputas y conflictos entre los grupos paraestatales, guerrilleros y paramilitares, por la ausencia del Estado y la falta de gobernabilidad y legitimidad en los distintos territorios apartados del centro del poder. El interrogante que no se resuelve claramente es si esos grupos se representan solo a sí mismos, o tienen bases sociales que garantizan su continuidad, es decir si representan a una parte de la sociedad en conflicto.

5. Conclusiones

Un aspecto en común referenciado en todos los estudios de conflicto armado y crecimiento económico, es que la pérdida de capital humano y pérdida de vidas ajenas al accionar militar en el conflicto tienen su impacto negativo en el mediano y largo plazo en la economía nacional. Otros autores adicionan que entre otros, estos factores estructurales generan pobreza y que el conflicto armado, alimenta el círculo intergeneracional de la misma.

La sociedad que no participa directamente en el accionar militar, pero reside en una amplia cercanía a las zonas de conflicto se ve afectada en el sentido de que los sentimientos generados por los hechos violentos se pueden incorporar en la manera de relacionarse los individuos y, de allí, a las culturas en los cuales se termina por identificarse, en el sentido teórico presentado con Darlauf (2004). Este no es un proceso de corto plazo sino de acumulación de sensaciones y sentimientos constitutivos de las heurísticas de disponibilidad (Kahneman, 2003). que están en la base de las culturas. Si se revisan las historia de las regiones en Colombia, se puede encontrar que existen diferencias en el manejo del

conflicto y que no existen claras relaciones causales mas allá de los mitos recreados en las diferentes culturas. En suma, en el conjunto de la nacionalidad, agregando estas «guerras regionales» se puede también admitir que mas es tiempo en que ha habido de conflicto que de construcción de una paz positiva (Galtung, 1996).

En esta misma dirección, las conclusiones derivadas de este artículo apuntan a que los ataques violentos hacia la infraestructura productiva y/o gubernamental, afectan negativamente el crecimiento económico de los territorios. El caso regional objeto de estudio, no escapa a este comportamiento, en la medida que queda evidenciado una disminución en el crecimiento del PIB regional y, adicionalmente, disminuye la capacidad futura de desarrollo de las localidades debido a que ocasionan la muerte a personas civiles y contribuye a desinstitucionalizar y, con ello, generar una repetición de los hechos en los imaginarios sociales. No importa el tamaño del daño, sino la forma en que estos hechos son constitutivos de los factores relevantes que impiden la integración social.

Puede interpretarse que ese 0,5% de afectación del PIB regional puede ser deleznable. Sin embargo al golpear de manera sostenida a lo largo de la historia en dos sectores específicos: uno, los sectores en los cuales se apoyan los accionares de guerrilla y paramilitares, principalmente rural y en zonas de bajos ingresos, con permanencia en estado de pobreza y, dos, el sector urbano asociado a lo agrícola y la industria. A los ubicados en el grupo uno no les alcance claramente el efecto económico de la confrontación, en tanto que los residentes en estas geografías son, generalmente pobres, atrapados en un esquema de producción con bajas capacidades de competir. En las zonas urbanas⁵, o grupo dos, el estrato 1 es asimilable a los sectores pobres del campo y buena parte de ellos son resultado de migraciones forzosas. A los sectores medios, estratos 2, 3 y parte del 4, les golpea la inflación -20% en 2017 para el rubro de alimentación y bebidas no alcohólicas- por la no existencia de mayor oferta de alimentos. Así, su posibilidad de construir riqueza se relantiza o estanca.

Como se mostró, el conflicto armado interno puede tener sus efectos negativos sobre el crecimiento económico de la Región Caribe colombiana. Los impactos se presentan a través de la pérdida de infraestructura y capital humano y, con las cifras del delito presentadas atrás, contribuir al clima de inseguridad. Así, las negociaciones de paz con estos grupos pueden ubicarse como una importante oportunidad de pensar el posconflicto en términos de posibilitar el acceso a la sociedad del nuevo riesgo o posmoderna a los sectores ubicados en las amplias zonas geográficas rurales pobres y sectores urbanos deprimidos. Puede ser entendido como una apuesta más allá de industrialización clásica que, hoy ha dado paso a otras formas de establecimiento de relaciones sociales y que se constituyen en lo mas avanzado de la civilización en términos de Elías (1989).

Desde el punto de vista señalado, entonces, el posconflicto se puede definir si se aboca desde una perspectiva muy amplia de lo consolidado como historia y se busca avanzar hacia las experiencias de las sociedades desarrolladas en sus alcances de conocimiento y consolidación de bienestar. No será posconflicto la repetición de los escenarios en que se

⁵ En términos de estratos la población se ubica en 2014, según DANE, en: 10,4% estrato 1, 41,3% estrato 2, 36% estrato 3, 7,8% estrato 4, 2,6% estrato 5 y 1,9% estrato 6.

formó el conflicto. Las experiencias de paramilitares transformadas en bandas, de guerrilleros cambiando de organización y fortaleciéndose en el mediano y largo plazo, como son los casos colombianos, son las pruebas palpables de que el posconflicto requiere, además de la dejación de las armas, un escenario y clima donde no sea necesario estar discutiendo salidas, como la distribución de la riqueza, que ya han demostrado su incapacidad para resolver los conflictos, sino la búsqueda de consensos fuertes para construir riqueza y una paz positiva que integre las sociedades en términos de respeto a los acumulados sociales.

6. Referencias bibliográficas

- Aguilar-González, Fernando (2004) Teoría de la decisión e incertidumbre: modelos normativos y descriptivos. *Empiria*, 8, 139-160. DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/empiria.8.2004.982>
- Alchian, Armen A. & Demsetz, Harold (1981) El paradigma de los derechos de apropiación (1973). *Hacienda pública española*, nº 68, pp. 318-324.
- Alvarez, Stephanie y Rettberg, Angelika (2008) Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. *Revista Colombia Internacional*, nº 67, pp. 14-37. En: https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_67/02_Analisis_1.pdf [Consultado el 10 de septiembre de 2016]
- Amaya-Pulido, Pedro (2001) *Colombia un país por construir: Problemas y retos presentes y futuros. Una propuesta para el análisis, la controversia y la concertación*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/Editorial Unibiblos.
- Aumann, Robert J. (2005) *War and Peace*. En: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2005/aumann-lecture.pdf [Consultado el 11 de mayo de 2010]
- Bayer, Resat & Rupert, Mathew C. (2004) Effects of Civil Wars on International Trade, 1950-92. Vol. 41(6), pp. 699-713.
- Beck, Ulrich (2017) *La metamorfosis del mundo*, Barcelona, Paidós.
- Becker, Gary S. (1974) Crime and Punishment: An Economic Approach. En: Becker, Gary S. y Landes, William M. (eds.) *Essays in the Economics of Crime and Punishment*. NBR: <http://www.nber.org/books/beck74-1>
- Boulding, Kenneth (1973) *Peace and the War Industry*, Nueva York, Transaction Books.
- Bourguignon, Francois; Nuñez, Jairo & Sánchez, Fabio (2002) A Structural Model of Crime and Inequality in Colombia, *Journal of the European Economic Association*, Vol. I(2-3), pp. 440-449.
- Bresser-Pereira, Luiz C. (2008) The Dutch disease and its neutralization: a Ricardian approach. *Revista de economia política*, Vol. 28(1), pp. 47-71.
- Cárdenas, Mauricio (2001) Economic Growth in Colombia: A Reversal of 'Fortune?' *Working Paper*, nº. 83, Center for International Development, Harvard University, Cambridge-MA, pp. 1-41.

- Castro, Manuel, Wartenberg, Jorge & Celis, Andrés (2000) El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998, *Archivos de Economía*, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, pp. 21-63.
- Coase, Ronald H. (1937) The nature of the firm. *Economica*, Vol. 4(16), pp. 386-405.
- Collier, Paul & Duponchel, Marguerite (2010) The economic legacy of civil war: firm-level evidence from Sierra Leone. *UNU-WIDER Working Paper 2010/90*.
- Collier, Paul & Hoeffler, Anke (1998) On economic causes of civil war, *Oxford Economic Papers*, Vol. 50(4), pp. 563-573.
- Collier, Paul (1999). On the Economic Consequences of Civil War, *Oxford Economic Papers*, Vol. 51(1), pp. 168-183.
- Concha, José R. & Gómez, Oscar A. (2016) Análisis de atracción de inversión extranjera a países de la Alianza del Pacífico, *Estudios Gerenciales*, Vol. 32(141). En: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/rt/prINTERfriendly/2330/html
- Corden, Warner M. (1984) Booming sector and Dutch disease economics: survey and consolidation, *Oxford Economic Papers*, Vol. 36(3), pp. 359-380.
- Darlauf, Steven (2004) Neighborhood effects. En: Henderson, J. Vernon & Thisse, Jacques-François, *Handbook of Regional and Urban Economics*, nº 4, pp. 2174-2242.
- Demsetz, Harold (1980) Hacia una teoría general de los derechos de propiedad, *Información Comercial Española. Revista de Economía*, nº 557, pp. 59-66.
- Durán-Pabón, Iván M. (2011) *Conflicto armado y crecimiento económico municipal en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, pp. 1-64. En: http://www.bdigital.unal.edu.co/3575/1/TesisIMD_%28PlantillaUnal%29.pdf [Consultado el 15 de febrero de 2017]
- Elbadawi, Ibrahim; & Hegre, Håvard (2008) Globalization, Economic Shocks, and Internal Armed Conflict. *Defence and Peace Economics*, Vol. 19(1), pp. 37-60.
- Elias, Norbert (1989) *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, F.C.E.
- Elias, Norbert (1994) *La teoría del símbolo*, Barcelona, Península.
- Galtung, Johan (1964) An editorial. *Journal of Peace Research*, Vol. 1(1), pp. 1-4.
- Galtung, Johan (1996). *Peace by peaceful Means: Peace and conflict, Development and civilization*, Oslo, London, International Peace Research Institute/Sage publications.
- Galtung Johan & Fischer, Dietrich (2013) Positive and Negative Peace. En: *Johan Galtung. Pioneers in Science and Practice*, Vol. 5, pp. 173-178.
- Granada, Camilo & Rojas, Leonardo (1995) Los costos económicos del conflicto armado en Colombia: 1990-1994, *Revista de Planeación y Desarrollo*, Vol. 26(4), pp. 119-151
- Guerrero, Rodrigo & Londoño, Juan Luis (1999) Violencia y sus costos en América Latina, *Coyuntura Social*, nº 21, pp. 73-105.
- Hegre, Håvard (2000) Development and the Liberal Peace: What Does it Take to be a Trading State? *Journal of Peace Research*, Vol. 37(1), pp. 5-30.

- Hicks, Jhon (1985) *Métodos de economía dinámica*, México, F.C.E.
- Hoeffler, Anke & Reynal-Querol, Marta (2003) Measuring the Costs of Conflict, Oxford, Centre for the Study of African Economies, Oxford University. En: <http://users.ox.ac.uk/~ball0144/research.htm> pp. 1 – 25.
- Ibañez Ana & Jaramillo, Christian (2006) Oportunidades de desarrollo económico en el posconflicto: propuesta de política, *Coyuntura Económica*, Vol. XXXVI(2), Bogotá- Colombia, Fedesarrollo, pp. 93-127.
- Kahneman, Daniel (2003) Maps of Bounded rationality: Psychology for Behavioral Economics, *The American Economics Review*, pp. 1449-1475.
- Krier, Jamnes E. (2009) Evolutionary theory and the origin of property rights, *Law & Economics Working Papers*, n° 95, pp. 139-162.
- Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice (2006) *Economía Internacional, Teoría y Política*. Madrid, Pearson Educacion.
- López-Caballero, Juan M. (2017) De la enfermedad holandesa y otras enfermedades, *Dinero*, n° 520, 96.
- Maystadt, Jean-François, De Luca, Giacomo, Sekeris, Petros & Ulimwengu, John (2014) Mineral resources and conflicts in DRC: a case of ecological fallacy? *Oxford Economic Papers*, Vol. 66(3), pp. 721-749.
- Nelson, Richard R. & Winter, Sidney G. (1982) *An evolutionary theory of economic change*, Massachusetts, Harvard University Press.
- Otero-Prada, Diego (2007), *Las cifras del conflicto colombiano*, Bogotá, Colombia, Publicado por Indepaz.
- Pareto, Wilfredo (1946) *Manual de Economía Política*, Buenos Aires, Atalaya.
- Pinto Borego, Maria E., Vergara, Andrés & Lahuerta-Percipiano, Yilberto (2005) Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003, *Archivos de Economía*, n° 277, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, pp. 1-65.
- Ramos Ruiz, José L. (2006) *Modalidades organizativas de los encadenamientos productivos en países de economías emergentes: El caso del sector lácteo en el Caribe colombiano*. Tesis doctoral presentada en la Universidad Politécnica de Valencia (España). En: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/1876/tesisUPV2453.pdf>
- Ramos Ruiz, José L. (2012) La escuela de los derechos de propiedad: Análisis crítico de la teoría Naïve de los derechos de propiedad, *Revista ICE–Separata Nuevas corrientes de pensamiento económico*, n° 865, 91-105.
- Ramsay, Kristopher W. (2011) Revisiting the Resource Curse: Natural Disasters, the Price of Oil, and Democracy. *International Organization*, n° 65, pp. 507-529.
- Reyes-Posada, Alejandro (1987) La violencia y el problema agrario en Colombia, *Revista Análisis Político*, n° 2. En: <https://es.scribd.com/document/80965689/La-Violencia-y-El-Problema-Agrario-en-Colombia> [Consultado el 5 de octubre de 2016]
- Ross, Michael L. (2004) How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases, *International Organization*, Vol. 58(1), pp. 35-67.

- Rubio, Mauricio (1997) Los costos de la violencia en Colombia. *Documento de trabajo CEDE* 11, Bogotá, Universidad de los Andes, pp. 1-23.
- Sanabria-Landazábal, Néstor J., Cárdenas-Beltrán, Jesus M. & Contreras-Capella, Jairo A. (2015) El delito y la fundamentación de la política criminal, *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 8(2), pp. 53-74.
- Sánchez-Torres, Fabio & Díaz, Ana M. (2008) Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano. *Documento CEDE*. En: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/d2005-58.pdf [Consultado el 9 de octubre de 2016].
- Schelling, Thomas C. (1964) *La estrategia del conflicto*, Madrid, Tecnos.
- Schwab, Klaus (2016) *La cuarta revolución industrial*, Barcelona, Debate.
- Steiner, Roberto (1997) Los dólares del narcotráfico, *Cuadernos de Fedesarrollo*, nº 2. En: <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1899> [Consultado del 20 de mayo de 2017].
- Tversky, Amos & Kahneman, Daniel (1983) Extensional versus Intuitive reasoning. The Conjunction Fallacy in probability judgment, *Psychological Review*, Vol. 90(4), pp. 293-315.
- Trujillo-Ciro, Edgar & Badel-Rueda, Martha (1998) Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996, *Archivos de Economía*, nº 76, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, pp. 1-44.
- Valencia-Agudelo, Germán D. (2006) La economía frente al conflicto armado colombiano, 1990-2006, *Perfil de Coyuntura Económica*, nº 8, pp. 141-174.
- Williamson, Oliver E. (1985) *The Economics Institutions of Capitalism*, New York, The Free Press, New York.

INFOGRAFÍA

CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) <http://www.cerac.org.co/es/>

PROCESO EDITORIAL • EDITORIAL PROCESS INFO

Recibido: 07/11/2017 Aceptado: 19/12/2017

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO • HOW TO CITE THIS PAPER

Ramos Ruiz, José Luis *et al.* (2017) Conflicto-economía y postconflicto: evidencia para el caribe colombiano, *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 10(2), pp. 117-142.

SOBRE LOS AUTORES • ABOUT THE AUTHORS

José Luis Ramos-Ruiz. Doctor en Economía y Sociología. Profesor del Instituto de Estudios Económicos del Caribe [IEEC], Director del Doctorado en Ciencias Sociales. Investigador asociado al Grupo de investigación GRANECO, <http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000001450> Correo: jramos@uninorte.edu.co

José Luis Polo-Otero. Doctor en Economía. Profesor del Instituto de Estudios Económicos del Caribe [IEEC] e Investigador asociado al Grupo de Análisis Económico GRANECO, de la Universidad del Norte. Correo: lpoloj@uninorte.edu.co

Gustavo Jesús Rodríguez-Albor. Doctor en Ciencias Sociales. Docente investigador de la Universidad Autónoma del Caribe, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y del Centro de Altos Estudios para la Paz. Miembro del Grupo de investigación INCATUR, <http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000003774> Correo: Gustavo.rodriguez51@uac.edu.co

Néstor Juan Sanabria-Landazábal. Docente investigador Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia. Phd en Estudios Latinoamericanos, Magister en Economía y Política Internacional, Sociólogo. Grupo de investigación INCATUR, <http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000003774> Correo: nestor.sanabria@uautonoma.edu.co

José Luis Moreno-Cuello. Magister en Administración de Empresas. Profesor del Instituto de Estudios Económicos del Caribe de la Universidad del Norte. Investigador asociado al Grupo de investigación GRANECO, <http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000001450>. Correo: jmoreno@uninorte.edu.co